

INE/CG1267/2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN CONTRA DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA SUR, INTEGRADA POR MORENA Y PARTIDO DEL TRABAJO, ASÍ COMO DE SU CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL C. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO Y LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PAZ, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LA C. MILENA PAOLA QUIROGA ROMERO, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN BAJA CALIFORNIA SUR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS**, integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normativa electoral en materia de fiscalización en cuanto al origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja presentado por Jesús Méndez Vargas, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California Sur. El primero de junio de dos mil veintiuno, esta Unidad Técnica de Fiscalización tuvo conocimiento de un escrito de queja remitido vía correo electrónico institucional de la cuenta juanpablo.figueroa@ine.mx de Juan Pablo Figueroa García, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en Baja California Sur, por medio del cual remite el escrito de queja suscrito por Jesús Méndez Vargas, en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California Sur, en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, así como de su candidato a Gobernador de Baja

California Sur, el C. Víctor Manuel Castro Cosío y su candidata a la presidencia municipal de La Paz, en el estado de Baja California Sur, la C. Milena Paola Quiroga Romero, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en dicha entidad federativa, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización (Foja 1 a 15 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, en su escrito de queja, así como las pruebas aportadas:

“(…)

HECHOS

PRIMERO. - *El 01 de diciembre de 2020 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California celebró sesión extraordinaria en la que dio inició de manera oficial el Proceso local Electoral 2020-2021, en el que se habrán de renovar los cargos de Gobernador, Alcaldes y Diputados de mayoría relativa y proporcional en Baja California Sur.*

SEGUNDO. - *Es un hecho público y notorio que el 27 de marzo de 2021 el C. Víctor Manuel Castro Cosío se registró ante el Instituto Estatal Electoral del Baja California Sur como candidato a Gobernador de Baja California Sur por parte del partido político MORENA para el Proceso Electoral 2020-2021.*

TERCERO. - *Es un hecho público y notorio que el 29 de marzo de 2021 la C. Milena Paola Quiroga Romero se registró ante el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral del Baja California Sur como candidata a la Presidencia Municipal de La Paz por parte de la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partido político MORENA y DEL TRABAJO para el Proceso Electoral 2020-2021.*

CUARTO. - *Es un hecho público y notorio que el 4 de abril de 2021, dieron inicio las campañas electorales para todos los candidatos del Estado de Baja California Sur, para el Proceso Electoral 2020-2021.*

CUARTO. *El 14 de mayo de 2021, el Senador de la República, el C. RICARDO MOREAL ÁVILA en un evento proselitista a favor de C. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, candidato para Gobernador de Baja California Sur, MILENA PAOLA QUIROGA ROMERO, candidata a la Presidencia Municipal de La Paz,*

presentó un libro titulado "Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral" y de su propia voz, producido por la editorial PORRÚA.

*El evento referido en el párrafo anterior, fue transmitido en vivo desde la cuenta personal del Senador de la República, el **C. RICARDO MOREAL ÁVILA**, y puede ser visible en dirección de URL siguiente:*
<https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/982031655668339>

*De la misma forma, dicho evento, fue transmitido en vivo desde la cuenta personal del **C. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO**, candidato para Gobernador de Baja California Sur por MORENA y PT, mismo que puede ser visible en dirección de URL siguiente:*
https://www.facebook.com/watch/live/?v=490051472437554&ref=watch_permalink

*La supuesta presentación del Libro, por parte del Senador de la República, es una farsa, ya que, gran parte del evento, se lo dedica, el Senador Monreal, a pedir el apoyo político-electoral a favor de **C. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO**, manifestando que se encuentran 12 (doce) Senadores de la República, en apoyo al candidato, esto porque, literalmente lo menciona en su narrativa, en el minuto **28:58** al minuto **31:22** del video transmitido en vivo de la página del senador de la república.*

Extracto de lo dicho por el senador Ricardo Monreal Ávila:
aquí habemos 12 senadores, ¿Por qué estamos aquí? ¿Vienen a la presentación del libro? Si, a este acto académico, pero vienen también porque queremos mucho a un hombre extraordinario, a Víctor, no solo los mueve el libro, los mueve la presencia de este señor, este hombre es honrado, este hombre no va a robar, este hombre es sabio y por esa razón venimos 12 senadores y senadoras de todo el país a decirle "Víctor no estás solo" Víctor eres nuestra esperanza en Baja California Sur, para que todo este pueblo este Estado salir adelante ya es hora de que Baja California Sur tenga un hombre honrado de gobernador y este hombre está más allá de cualquier ambición personal de cualquier dinero o de acumulación de capital, el como yo ya lo que queremos es bien morir, pero haciendo buenos gobiernos que dejen huella y que logren transcender la vida del Estado de la república, por eso a mí me alegra mucho que este aquí, Lucia Trasviña, porque esta mujer valiente, ahora está demostrando que la unidad es la única manera de sacar adelante la elección, me alegra mucho que este Ricardo, me alegra mucho que todos estén, porque nadie falta en este movimiento, si algunos se sintieron que no fueron electos o que no fueron designados por la dirigencia del partido dejen a un lado ese resentimiento súmense porque los necesitamos es un movimiento extraordinario, que intenta transcender las fronteras y que intenta transformar el Estado.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Estas declaraciones por parte del Senador Ricardo Monreal Ávila es una clara violación a la Ley General de Partidos Políticos, por las aportaciones de entes prohibidos, es decir de los 12 senadores que se presentaron en apoyo directo al candidato VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, violando el principio constitucional de equidad en la contienda.

*Además de las declaraciones manifiestas del Senador, en apoyo al Candidato de la coalición "junto haremos historia en Baja California Sur" el **C. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO**, el lugar se encontraba vestido con lonas alusivas a la campaña de dicho candidato, haciendo un evento de carácter político electoral y no uno cultural.*

A continuación, se muestra captura de pantalla de la publicación que fue subida por parte del denunciado, en su página de Facebook:

Imagen visible en el video en el minuto 00:09, con una duración de 51 minutos, en la cuenta de Facebook con la siguiente dirección URL:
<https://www.facebook.com/Milenaquirogabcs/videos/%20315114783346889>



Imagen visible en el minuto 05:36 del video con una duración de 55:43 minutos, en la cuenta de Facebook con la siguiente dirección URL:
<https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/982031655668339>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS**

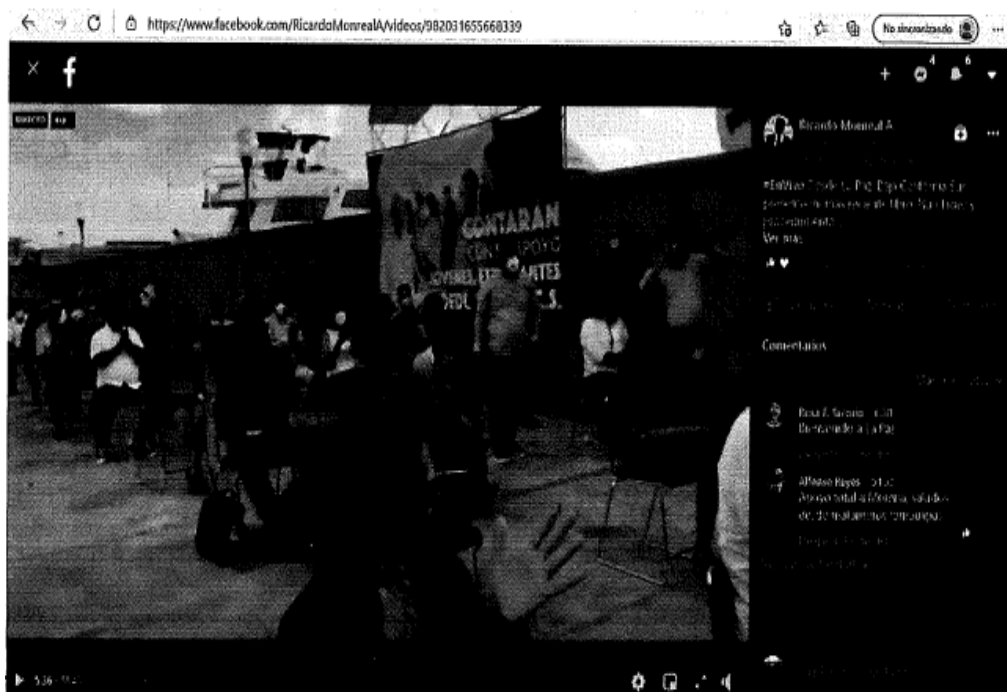
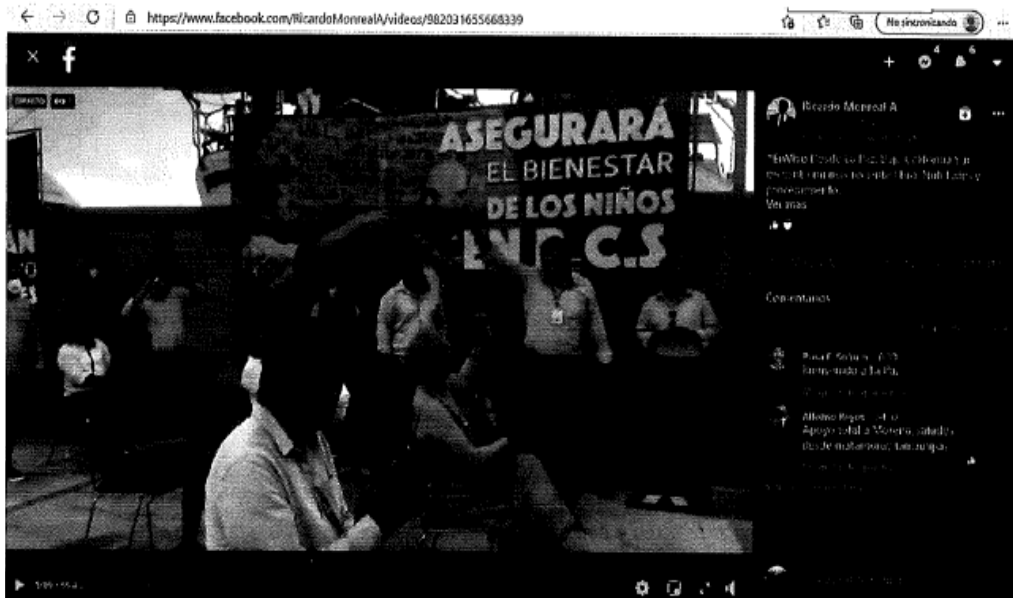


Imagen visible en el minuto 05:39 del video con una duración de 55:43 minutos, en la cuenta de Facebook con la siguiente dirección URL:
<https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/982031655668339>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS**



Video con una duración de 01:00:17 minutos, visible en la cuenta de Facebook con la siguiente dirección URL:

<https://www.facebook.com/VictorCastroCosio/videos/490051472437554>



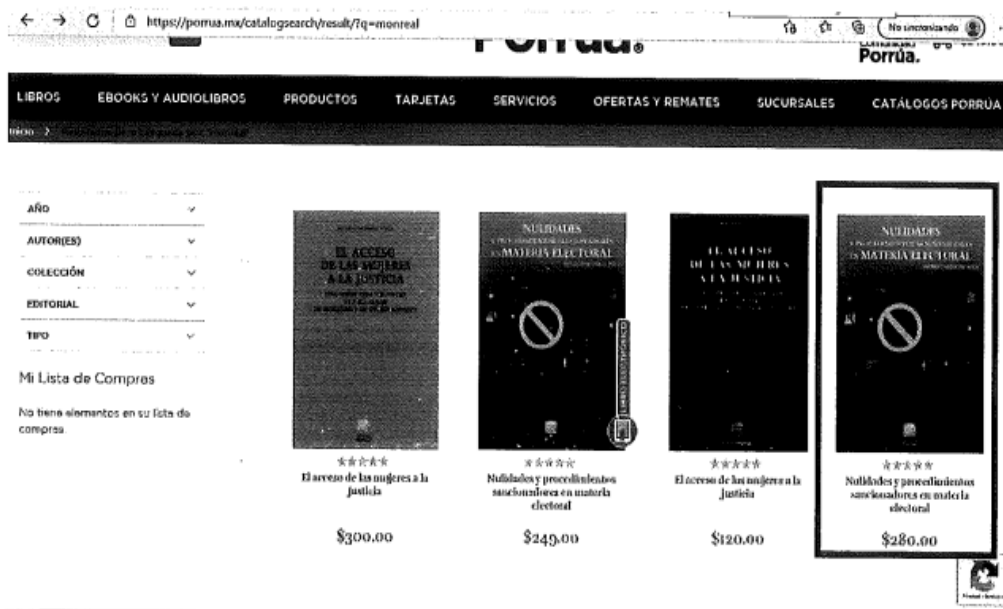
**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS**

Video con una duración de 01:00:17 minutos, visible en la cuenta de Facebook con la siguiente dirección URL:
<https://www.facebook.com/VictorCastroCosio/videos/490051472437554>
Imagen en la que 12 Senadores de la Republica intervienen en la campaña de gobernador del C. Víctor Castro Cosío.



Imagen de la página de la editorial promocional del libro, visible en la siguiente dirección URL:
<https://porrua.mx/ckeckout/cart/>





(...)

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

Con fundamento en el artículo 468 numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se solicita a esa H. autoridad se dicten las medidas cautelares consistentes en la **SUSPENSIÓN INMEDIATA** traducida en ordenar dar de baja del perfil de Facebook la publicación denunciada.

La equidad es un principio rector del sistema democrático y condición fundamental para asegurar que la competencia entre quienes participan en un Proceso Electoral se realice en condiciones de justicia e igualdad, impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado. Este principio rige a todo el sistema electoral e implica, la prohibición de aprovecharse o beneficiarse con una marca comercial en la propaganda electoral.

Así pues, se pide a esa H. Autoridad electoral conceda las medidas cautelares y no se permita se continúe infringiendo dicho principio.”

Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por el **Partido Acción Nacional** en su escrito de queja, mismos que fueron precisados en los términos siguientes:

“(…)

PRUEBAS

TÉCNICA. Consistente en la imagen contenida en la presente denuncia.

INSPECCIÓN.- Se solicita que en ejercicio de su facultad investigadora certifique la existencia y contenido de las siguientes direcciones electrónicas:

<https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/982031655668339>

-
- https://www.facebook.com/watch/live/?v=490051472437554&ref=watch_permalink
- <https://www.facebook.com/Milenaquirogabcs/videos/%20315114783346889>
- <https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/982031655668339>
- <https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/982031655668339>
- <https://www.facebook.com/VictorCastroCosio/videos/490051472437554>
- <https://porrua.mx/ckeckout/cart/>

No se omite señalar que, para efecto de la inspección que se solicita, se pide que, en caso de que esa H. Autoridad no encuentre el contenido en la liga electrónica señalada, sea consultada de la siguiente manera: Ingresar al perfil público de Facebook <https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/982031655668339> y deslizar la barra de desplazamiento hacia abajo hasta encontrar las publicaciones que en los hechos se hace referencia, mismas que pueden ser identificadas acorde a la fecha, encabezado e imagen que ahí que en el hecho cuarto se detallan.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado en el expediente en el que se actúa y que beneficie los intereses de mi representada.

PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, LEGAL y HUMANA, en lo que beneficie a los intereses de mi representada.

Los anteriores medios de prueba se relacionan con todos hechos y argumentos pronunciados en el presente escrito de queja, con los cuales se acreditan los actos violatorios realizados por la parte denunciada en los términos precisados en el presente escrito de queja." (sic)

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS, notificar el inicio al Secretario Ejecutivo y a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo

General del Instituto Nacional Electoral; y a las partes denunciadas, notificar el inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito; y notificar el inicio del procedimiento al quejoso, así como, proceder a la tramitación y sustanciación del mismo, publicándose el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto (Foja 16 A 18 del expediente).

IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.

a) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 19 a 22 del expediente).

b) El siete de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento; asimismo, mediante razones de publicación y retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente en los estrados de este Instituto (Foja 23 y 24 del expediente).

V. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/27580/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó el inicio del procedimiento de mérito a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (Foja 28 a 30 del expediente).

VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27578/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó el inicio del procedimiento de mérito, al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto (Foja 25 a 27 del expediente).

VII. Notificación de inicio y emplazamiento de procedimiento de queja al partido Morena.

a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27584/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó e informó el inicio del procedimiento de queja, al Representante de Finanzas del partido Morena, el C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, para que realizara sus aclaraciones y expusiera lo que a su

derecho conviniera, asimismo, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Foja 31 a 50 del expediente).

b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento de procedimiento de queja al Partido del Trabajo.

a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27588/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó e informo el inicio del procedimiento de queja, al Representante de Finanzas del Partido del Trabajo, el C. José Alberto Benavides Castañeda, para que realizara sus aclaraciones y expusiera lo que a su derecho conviniera, asimismo, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Foja 51 a 70 del expediente).

b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C. Víctor Manuel Castro Cosío, candidato a Gobernador del Estado de Baja California Sur por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos Morena y del Trabajo.

a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27590/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó el inicio del procedimiento de queja al C. Víctor Manuel Castro Cosío, candidato postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos Morena y del Trabajo para el cargo a Gobernador, en el Estado de Baja California Sur, para que realizara las manifestaciones conducentes, asimismo ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones y estimara pertinentes (Foja 71 a 83 del expediente).

b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

X. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la C. Milena Paola Quiroga Romero, candidata a presidenta municipal de la Paz, Baja California Sur, por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos Morena y del Trabajo.

a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27592/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó el inicio del procedimiento de queja a la C. Milena Paola Quiroga Romero, candidata postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos Morena y del Trabajo para el cargo a la presidencia municipal de La Paz, en el Estado de Baja California Sur, para que realizara las manifestaciones conducentes, asimismo ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones y estimara pertinentes (Foja 84 a 97 del expediente).

b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Partido Acción Nacional. El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27593/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión e inicio del procedimiento de queja, al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional, C. Omar Francisco Gudiño Magaña, corriéndole traslado del acuerdo (Foja 98 a 105 del expediente).

XII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.

a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28786/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado ¹, la certificación de cinco ligas electrónicas, de las cuales cuatro corresponden a la red social Facebook y una a la Editorial Porrúa señaladas en el escrito de queja (Foja 106 a 108 del expediente).

b) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1615/2021, Oficialía Electoral comunicó el acuerdo de admisión a la solicitud de certificación, remitiendo el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/278/2021 correspondiente a la certificación de cinco páginas de internet (Foja 109 a 138 del expediente).

XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

¹ En adelante, Oficialía Electoral.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/947/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros², que informara si dentro de la contabilidad de los partidos denunciados se registró el evento de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno al que hizo referencia el quejoso, así como la propaganda exhibida en el (Foja 139 a 147 del expediente).

b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2501/2021, la Dirección de Auditoría dio contestación a la solicitud de información referida (Foja 248 a 250 del expediente).

c) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1397/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría del Instituto Nacional Electoral, el costo de conformidad con la matriz de precios de diversos conceptos detectados en el evento celebrado el catorce de mayo de dos mil veintiuno (Foja 292 a 295 del expediente).

d) El veinte julio de dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud referida (Foja 296 a 299 del expediente).

XIV. Solicitud de información al Senador de la República por la LXIV Legislatura, el Dr. Ricardo Monreal Ávila.

a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32142/2021, se solicitó al Senador Ricardo Monreal Ávila que informara los nombres de los senadores que acudieron al evento de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el que presentó su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en Materia Electoral” en La Paz, Baja California Sur, así como los motivos por los que estuvieron presentes los candidatos denunciados y de quien estuvo a cargo la organización del evento (Foja 148 a 150 del expediente).

b) El primero de julio de dos mil veintiuno, el Senador Ricardo Monreal Ávila dio respuesta a la solicitud de información (Foja 151 a 158 del expediente).

XV. Solicitud de información al Senador de la República por la LXIV Legislatura, el Dr. Ricardo Velázquez Meza.

² En adelante, Dirección de Auditoría.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32145/2021, se solicitó al Senador Ricardo Velázquez Meza que informara los motivos de su presencia al evento de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno en La Paz, Baja California Sur, el de los candidatos denunciados, su participación en el mismo, así como los gastos de su traslado (Foja 159 a 161 del expediente).

b) El primero de julio de dos mil veintiuno, el Senador Ricardo Velázquez Meza mediante oficio RVM/066/2021 dio respuesta a la solicitud de información (Foja 162 a 164 del expediente).

XVI. Solicitud de información a la Senadora de la República por la LXIV Legislatura, la Lic. Martha Lucía Micher Camarena.

a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32150/2021, se solicitó a la Senadora Martha Lucía Micher Camarena que informara los motivos de su presencia al evento de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno en La Paz, Baja California Sur, el de los candidatos denunciados, su participación en el mismo, así como los gastos de su traslado (Foja 165 a 167 del expediente).

b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Senadora Martha Lucía Micher Camarena dio respuesta a la solicitud de información (Foja 168 a 172 del expediente).

XVII. Solicitud de información a la Senadora de la República por la LXIV Legislatura, la Lic. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath.

a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32152/2021, se solicitó a la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath que informara los motivos de su presencia al evento de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno en La Paz, Baja California Sur, el de los candidatos denunciados, su participación en el mismo, así como los gastos de su traslado (Foja 173 a 175 del expediente).

b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath dio respuesta a la solicitud de información (Foja 176 a 178 del expediente).

XVIII. Solicitud de información a la Senadora de la República por la LXIV Legislatura, la Mtra. Bertha Alicia Caraveo Camarena.

a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32147/2021, se solicitó a la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena que informara los motivos de su presencia al evento de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno en La Paz, Baja California Sur, el de los candidatos denunciados, su participación en el mismo, así como los gastos de su traslado (Foja 179 a 181 del expediente).

b) El primero de julio de dos mil veintiuno, la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena dio respuesta a la solicitud de información (Foja 182 a 184 del expediente).

XIX. Solicitud de información al Senador de la República por la LXIV Legislatura, el Dr. Daniel Gutiérrez Castorena.

a) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32144/2021, se solicitó al Senador Daniel Gutiérrez Castorena que informara los motivos de su presencia al evento de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno en La Paz, Baja California Sur, el de los candidatos denunciados, su participación en el mismo, así como los gastos de su traslado (Foja 185 a 187 del expediente).

b) El tres de julio de dos mil veintiuno, el Senador Daniel Gutiérrez Castorena dio respuesta a la solicitud de información (Foja 188 a 191 del expediente).

XX. Solicitud de información a la Senadora de la República por la LXIV Legislatura, la Lic. Lilia Margarita Valdez Martínez.

a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32153/2021, se solicitó a la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez que informara los motivos de su presencia al evento de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno en La Paz, Baja California Sur, el de los candidatos denunciados, su participación en el mismo, así como los gastos de su traslado (Foja 192 a 194 del expediente).

b) El doce de julio de dos mil veintiuno, la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez dio respuesta a la solicitud de información (Foja 195 a 197 del expediente).

XXI. Solicitud de información a Editorial Porrúa.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32997/2021, se solicitó al representante o apoderado legal de Editorial Porrúa que informara sobre la edición, producción y/o impresión del libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en Materia Electoral” (Foja 201 a 205 del expediente).

b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, Editorial Porrúa dio respuesta a la solicitud de información (Foja 206 a 223 del expediente).

XXII. Acuerdo de vista. El dos de julio de dos mil veintiuno, por acuerdo emitido de la Unidad Técnica de Fiscalización se ordenó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto. (Foja 198 a 200 del expediente).

XXXIII. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. El doce de julio de dos mil veintiuno, por acuerdo emitido de la Unidad Técnica de Fiscalización se ordenó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, y mediante oficio INE/UTF/DRN/34837/2021 se le hizo de su conocimiento para que en el ámbito de su competencia determine lo conducente por lo que hace a la utilización de los recursos públicos por integrantes del Congreso de la Unión en favor de candidatura en el Estado de Baja California Sur (Foja 245 a 247 del expediente).

XXIV. Razones y constancias.

a) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia con motivo de verificar las operaciones contables registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (<https://sif.ine.mx/loginUTF/>), respecto del C. Víctor Manuel Castro Cosío, candidato a la Gubernatura de Baja California Sur, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos Morena y del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el Estado de Baja California Sur, derivado de los hechos expuestos por el quejoso (Foja 224 a 236 del expediente).

b) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia con motivo de verificar las operaciones contables registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (<https://sif.ine.mx/loginUTF/>), respecto de la C. Milena Paola Quiroga Romero, candidata a Presidenta Municipal de La Paz, en el estado de Baja California Sur, postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos Morena y del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el Estado de Baja California Sur, derivado de los hechos expuestos por el quejoso (Foja 237 a 244 del expediente).

XXV. Acuerdo de Alegatos. El catorce de julio de dos mil veintiuno, una vez agotadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos, ordenando notificar a las partes para que formularan alegatos dentro del término de Ley, de conformidad con el artículo 41, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Foja 251 y 252 del expediente).

XXVI. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional.

a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35103/2021 se hizo del conocimiento a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Foja 253 a 259 del expediente).

b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

XXVII. Notificación de Alegatos al partido Morena.

a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35067/2021 se notificó a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Foja 260 a 267 del expediente).

b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

XXVIII. Notificación de Alegatos al Partido del Trabajo.

a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35066/2021 se notificó a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Foja 268 a 275 del expediente).

b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

XXIX. Notificación de Alegatos al otrora candidato, el C. Víctor Manuel Castro Cosío.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35065/2021 se notificó a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Foja 276 a 283 del expediente).

b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

XXX. Notificación de Alegatos a la otrora candidata, la C. Milena Paola Quiroga Romero.

a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35064/2021 se notificó a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Foja 284 a 291 del expediente).

b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.

XXXI. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el presente Proyecto de Resolución (Foja 300 Y 301 del expediente).

XXXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria por los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión: la Consejera Electoral, Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. COMPETENCIA. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,

numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 2³ del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por lo que se procede a entrar a su estudio en el presente caso, para determinar si se actualiza una de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, al existir una imposibilidad para conocer y formular un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Conviene precisar que, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.

³ “**Artículo 30. Improcedencia.** (...) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.”

Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación con el artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 30.
Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(...)

VI. **La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados.** En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto.

(...)”

“Artículo 31.
Desechamiento

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desecharamiento correspondiente, atendiendo a los casos siguientes:

I. **Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, numeral 1, fracciones I, o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del reglamento.** (...)” (Lo resaltado y subrayado es nuestro)

En este orden de ideas, del precepto legal señalado se desprende lo siguiente:

- Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer de los hechos narrados en el escrito de queja.
- En caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que deseche de plano el procedimiento y lo remita a la autoridad u órgano que resulte competente.

En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el C. Jesús Méndez Vargas, en su carácter de representante propietario del Partido Acción

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Nacional acreditado ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California Sur, por el que denuncia a servidores públicos que integran el Congreso de la Unión al realizar proselitismo en favor de una candidatura en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, se encuentra denunciando hechos que, a dicho del quejoso, podrían constituir posibles comisiones de irregularidades a la normatividad electoral por el uso indebido de utilización de recursos públicos.

En ese sentido, de una lectura integral al escrito de queja, se desprende que el quejoso denuncia proselitismo y propaganda difundida en redes sociales a cargo del senador Ricardo Monreal, quien a través del evento de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, de carácter político electoral y no cultural, llevó a cabo su presentación del libro titulado “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral” para difundir campaña a favor del C. Víctor Manuel Castro Cosío quien fuera en ese entonces candidato a Gobernador del estado de Baja California Sur, por lo que en su cargo como servidor público junto con los once senadores más que asistieron al evento, pudieran ser aportaciones de ente prohibido y **utilización de recursos públicos por parte de la Cámara de Senadores del Grupo Parlamentario Morena**, en específico de los senadores Ricardo Monreal Ávila, Alejandro Armenta Mier, Daniel Gutiérrez Castorena, Ricardo Velázquez Meza y las senadoras Claudia Esther Balderas Espinoza, Bertha Alicia Caraveo Camarena, María Soledad Luévano Cantú, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Martha Lucía Micher Camarena, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Lilia Margarita Valdez Martínez, así como del Diputado Federal Alfredo Porras Domínguez, ya que a través de la presentación difundida por el propio senador Ricardo Monreal Ávila no se trató de un acto cerrado pues tiene un nivel de audiencia que impacta como un medio de comunicación de radio y televisión, situación por la que esos gastos del evento no se encuentran registrados porque fue justificado con la supuesta presentación del libro.

Con el fin de acreditar su dicho, el quejoso ofrece diversas imágenes y ligas electrónicas de publicación del video del **evento del catorce de mayo de dos mil veintiuno**, tal como se advierte a continuación:

No	Fecha	Título	Red social	Liga electrónica
1	14 de mayo 2021	Con motivo de la publicación de la presentación del libro. *No se puede abrir el enlace	Facebook	https://www.facebook.com/Milenaquirogabcs/vid eos/%20315114783346889
2		“Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”	Facebook	https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/vid eos/982031655668339
3		Presentación del libro de “Nulidades y procedimientos	Facebook	https://www.facebook.com/VictorCastroCosio/vi deos/490051472437554

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

No	Fecha	Título	Red social	Liga electrónica
		sancionadores en materia electoral" de Ricardo Monreal A.		
4		Presentación del libro de "Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral" de Ricardo Monreal A.	Facebook	https://www.facebook.com/watch/live/?v=490051472437554&ref=watch_permalink

Ahora bien, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado B, penúltimo y últimos párrafos que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; personas precandidatas, coaliciones; candidatos y candidatas a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.

Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites respecto de su competencia.

En virtud de lo anterior, claramente salta a la vista que los hechos y la conducta que fueron denunciados no versan ni guarda relación alguna con posibles infracciones sobre el origen, monto, destino y manejo de los recursos de los partidos políticos y demás entes y personas obligadas, lo cual sí se encuentra dentro de la esfera competencial de la Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipula en los artículos 190 a 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales se colige que, una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, personas aspirantes a candidaturas independientes, precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas, organizaciones de observadores y agrupaciones políticas, a través de su Consejo General –como ya se dijo- que a su vez, cuenta con una Comisión especializada -de Fiscalización- cuya encomienda es la supervisión, seguimiento, control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios de la fiscalización.

Para ello, adicionalmente se encuentra y designa como autoridad sustanciadora de los procesos fiscalizadores, a la Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, como órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un Proceso Electoral, tal como se lee en virtud de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los entes y personas obligadas para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

En este sentido, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le confiera la ley, éste será competente.

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las atribuciones que el estado les tiene encomendadas.

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a los términos establecidos por la ley y el interés público.

Así las cosas, los hechos denunciados están encaminados a la solicitud de investigar el presunto uso de recursos públicos provenientes del erario a cargo del Grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Senadores en favor de las

candidaturas a Gobernador de Baja California Sur, así como de presidencias municipales en dicha entidad federativa, actos que no recaen en la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Al tenor del presente caso, se considera que los hechos denunciados encuentran correspondencia con la competencia de la autoridad contenciosa, ya que la denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de normatividad electoral en el ámbito federal, y cuya vía de resolución se encuentra establecida en el artículo 470, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 5, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, que determinan:

“Artículo 470.

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

a) Violan lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o

*c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
(...)”*

“Artículo 5

Órganos competentes

(...)

2. Los órganos del Instituto conocerán:

1. A nivel Central:

...

b) Del procedimiento especial sancionador, sustanciado y tramitado por la Unidad Técnica, cuando se denuncie las hipótesis previstas en el artículo 470 de la Ley General, así como cuando la conducta esté relacionada con propaganda política, electoral o gubernamental en materia de radio y televisión en las entidades federativas.

(...)”

De esta manera, para establecer la competencia de dicha autoridad debe analizarse que las conductas denunciadas se refieran a la difusión de propaganda por los

poderes públicos en cualquier modalidad de comunicación social y que no haya sido de carácter institucional, ni fines informativos o educativos, por la que se pueda señalar que se incluyeron nombres, imágenes, voces o símbolos que hayan implicado promoción personalizada de cualquier servidor público.

Asimismo, es posible determinar que esas conductas que infrinjan la propaganda para que la autoridad contenciosa conozca, se debe a la advertencia de conductas que generalicen sus efectos sobre la mayoría de la población o en distintos lugares y en la temporalidad en que incidan los procesos electorales, o bien, de su gravedad se considere una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, la normatividad electoral en materia de quejas y denuncias, propaganda que afecte la contienda electoral y en específico que contravenga el artículo 134 constitucional párrafos séptimo y octavo, es decir, el incumplimiento del principio de imparcialidad cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas o candidatas durante los procesos electorales, será la vía contenciosa de la autoridad nacional la que conozca y, en su caso, se tramite conforme a derecho.

De este modo, la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** en su **artículo 134**, párrafos séptimo y octavo, establece la **obligación de aplicar los recursos públicos** que se encuentren bajo responsabilidad de los servidores públicos de la Federación, Estados y municipios, **sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos**, asimismo, con la precisión de que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, pues **en ningún caso, dicha propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.**

Es preciso señalar que el artículo 59 numeral 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias, establece la procedencia en dicha materia que le corresponde a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral instruir el procedimiento especial sancionador cuando se denuncie la transgresión a lo establecido en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo medio comisivo sea radio o televisión, así como las mismas se cometan en un Proceso Electoral.

Por lo tanto, es preciso señalar que de las disposiciones expuestas se advierte que, será la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la que instruirá a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral los procedimientos especiales sancionadores dentro de los procesos electorales, cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral y que estas sean violatorias a lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución.

De conformidad con lo expuesto, se reitera por criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con número de Jurisprudencia 25/2010, Cuarta Época, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 3, Número 7, año 2010, páginas 32 y 34, la cual se transcribe a continuación:

Partido Acción Nacional

vs

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 25/2010

“PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base III, apartados A y C, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se obtiene que el ***Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos federales como locales y fuera de ellos, en las siguientes hipótesis:***

1. Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos políticos, por sí o por terceras personas, físicas o morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos políticos o que calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. En cambio, en el supuesto de violaciones a leyes locales durante los procesos electorales respectivos, por el contenido de la propaganda difundida en cualquier medio, distintas a las anteriores, la autoridad administrativa electoral local es competente para conocer del procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la sanción correspondiente; en estos casos, el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

sus atribuciones, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, se coordina con la autoridad local exclusivamente para conocer y resolver sobre la petición de medidas cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda en radio y televisión.”

En este sentido, le corresponde a la autoridad contenciosa a nivel nacional, conocer y llevar a cabo las diligencias necesarias para estar en posibilidad de remitir a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la integración del expediente que se haya admitido.

En las relatadas condiciones, y tomando en consideración las pretensiones del quejoso, esta autoridad advierte la actualización del presupuesto jurídico previsto en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al deducirse que la queja es notoriamente improcedente con base en las facultades legales atribuidas a la Unidad Técnica de Fiscalización, resultando dicha autoridad incompetente para conocer y pronunciarse respecto de los hechos denunciados.

Derivado de ello, se determina que no es competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización realizar un pronunciamiento respecto del hecho denunciado por lo que hace al uso indebido de recursos públicos. De ahí que, es contundente la configuración de la causal prevista en la fracción I, numeral 1, del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. Es decir, que la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para conocer de los hechos que constriñen el presente procedimiento.

En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de determinar desechar, por cuanto al hecho consistente en el uso de recursos públicos por parte de integrantes del Congreso de la Unión, en razón de la notoria incompetencia, al no conocer del hecho denunciado. Lo anterior, al advertirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y consideraciones de derecho antes vertidas, los hechos consistentes en uso indebido de utilización de recursos públicos deben ser **desechados**.

3. Medida Cautelar. El quejoso solicitó como **medida cautelar** en su escrito de queja, el retiro inmediato de la publicidad denunciada, esto es, la publicación realizada en el perfil de facebook.

Al respecto, primeramente debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo INE/CG161/2016⁴, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones:

Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k), 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución.

En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II del citado artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la concatenación de la información obtenida por diversas vías.

⁴ Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) estableció que la medida cautelar es una resolución accesorio, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.

Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la presencia de los siguientes elementos:

- La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;
- El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama; y
- La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de medidas en tales procedimientos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador especializado en materia de fiscalización.

Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la autoridad electoral administrativa -bien del Consejo General, de la Comisión de Fiscalización o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas cautelares dentro del procedimiento sancionador en materia de fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral administrativa.

Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no

constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.

Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del procedimiento sancionador en materia de fiscalización, se estima que el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen improcedente la implementación de la medida cautelar.

En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral establece que, en materia de fiscalización debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a la adopción de medidas cautelares en los procedimientos sancionadores en la materia.

4. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, se desprende que, el fondo del asunto que nos ocupa consiste en determinar si los partidos Morena y del Trabajo, así como sus candidatos postulados incurrieron en infracciones a la normativa y aplicación de los recursos, con motivo de la presentación del libro titulado “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral” en el evento difundido por el senador Ricardo Monreal Ávila y 12 senadores más, en los que expusieron su favoritismo por los candidatos denunciados con la exhibición de lonas como propaganda personalizada de los mismos, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado de Baja California Sur.

En consecuencia, debe determinarse si el partido político incumplió con lo dispuesto en los artículos los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 1, 55, numeral 1, 76, numeral 3 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I, 83, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos; así como 25, numeral 7, 27, 28, ,29, 31, 32, 82, numeral 2, 96, numeral 1, 121, numeral 1, inciso I), 127, 143 bis y 218 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (...)

(...)

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña; (...)

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

(...)

“Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero”

“Artículo 55.

1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.”

“Artículo 76.

(...)

3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales;

(...)”

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

(...)

b) Informes de Campaña:

1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(...)”

Artículo 83.

2. En los casos en los que se promocióne a dos o más candidatos a cargos de elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma:

a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Senador, se distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de la República y un sesenta por ciento al candidato a Senador;

b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Diputado Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a Presidente de la República, y un cuarenta por ciento al candidato a Diputado Federal;

c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un veinte por ciento al Presidente de la República, cincuenta al candidato a Senador, y en un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;

d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos a Presidente de la República, Senador, Diputado Federal y una campaña local, el gasto será distribuido en un quince por ciento al candidato a Presidente de la República; un treinta y cinco por ciento al candidato a Senador; en un veinticinco por ciento al Diputado Federal y un veinticinco por ciento a la campaña local respectiva;

e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República y una campaña local, se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente de la República y en un sesenta por ciento a la campaña local;

f) En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la República, Senador y una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento al candidato a Presidente de la República; sesenta por ciento al candidato a Senador y un veinte por ciento al candidato de la elección local respectivo;

- g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la República, Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente, en un treinta y cinco al candidato a Diputado Federal y en un veinticinco al candidato de la elección local;*
- h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador y un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;*
- i) En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato a Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta por ciento al candidato a Senador, un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal y un veinte por ciento al candidato a la campaña local;*
- j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole local; se distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y un veinticinco al candidato de la elección local respectiva;*
- k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato relacionado con una campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento, respectivamente, y*
- l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a Senadores o Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales.”*

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 25. Del concepto de valor (...)”

7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando para su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de precios, precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios obtenidos del Registro Nacional de Proveedores.”

Artículo 27.

Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados

1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente:

- a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.*

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.

d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

2. *Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.*

3. *Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto específico no reportado.*

4. *Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.”*

Artículo 28.

Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones

1. *Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se estará a lo siguiente:*

a) *Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el numeral*

7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.

b) *La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de contratación de la*

operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y la ubicación geográfica.

c) *Si prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos obligados*

los diferenciales determinados, así como la información base para la determinación del valor con la que cuente la Unidad Técnica.

d) *Si derivado de la respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación notificados por la Unidad*

Técnica, se procederá a su sanción.

e) *Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de la operación ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como ingreso*

de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto partidista.

f) *Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de los informes de precampaña o campaña, además de que el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto partidista, los valores determinados deberán ser reconocidos en los informes de precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos independientes, según corresponda.*

2. *Con base en la información determinada por la Unidad Técnica descrita en el inciso c) del numeral 1, del artículo 27, la Comisión establecerá, con base en la materialidad de las operaciones, las pruebas a realizar y con ello definirá los criterios para la selección de las muestras.”*

“Artículo 29. Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en procesos electorales

1. *Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes:*

I. *Los gastos genéricos de campaña, mismos que se pueden identificar como:*

a) *Los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña.*

b) *En los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición.*

c) *En los casos en los que se publique, difunda o mencione el emblema, lema con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos en conjunto o los contenidos de sus plataformas electorales, sin que se identifique algún candidato en particular.*

II. *Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de elección popular, mismos que se pueden identificar como:*

a) *Conjunto: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar al voto, especificando ámbitos de elección y tipos de campaña, sin mencionar específicamente a uno o más candidatos.*

b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el artículo 83 de la Ley de Partidos.

2. El procedimiento para prorratear el gasto identificado en el numeral 1 anterior, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del presente Reglamento.

Artículo 31. Prorrateo por ámbito y tipo de campaña

1. El prorrateo en cada ámbito y tipo de campaña se sujetará a lo siguiente:

a) Campañas a senadores. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a senadores beneficiados en proporción a su límite de gastos de campaña que corresponda según la entidad federativa de que se trate.

b) Campañas a diputados federales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a diputados federales beneficiados de manera igualitaria.

c) Campañas locales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los tipos de campaña y los candidatos beneficiados en los términos que establezca el artículo 218 del Reglamento.

Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio

1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:

a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos.

b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado.

c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, Distrito electoral federal, Distrito electoral local o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.

d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los servicios contratados o aportados para ese acto.

2. *Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios siguientes:*

Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución según lo señale el correspondiente kardex, notas de entrada y salida de almacén y cualquier otra evidencia documental que le genere convicción a la autoridad del beneficio.

b) *En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función del ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo.*

c) *En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine, de acuerdo al ámbito geográfico donde se ubiquen conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo.*

d) *Respecto a la propaganda difundida en internet se considerarán la totalidad de las candidaturas a nivel nacional del partido o coalición, siempre y cuando no se advierta la referencia a uno o varios candidatos.*

e) *Por lo que se refiere a los gastos de producción de radio y televisión, se considerarán las precampañas, campañas, precandidatos y candidatos en función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico en el que se difunda, de acuerdo con el catálogo de cobertura que apruebe el Comité de Radio y Televisión vigente.*

f) *Tratándose de gastos en diarios, revistas y medios impresos será en función de la cobertura geográfica de cada publicación.*

g) *Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.*

h) *Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas de campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las que el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas para las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o delegación, Distrito federal o local, según sea el caso, que corresponda al domicilio de cada persona integrante de la estructura.*

i) *En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá reconocerse el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con los gastos de que se trate, independientemente de quién haya contratado el bien o servicio. Por campaña beneficiada se entenderá aquélla que se vea favorecida por la erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga como finalidad difundir o promocionar alguno de los siguientes elementos: al*

candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de elección por el que se contiene, o al partido político.”

“Artículo 82.

Lista de proveedores

(...)

2. *Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, sólo podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, numeral 2 del presente Reglamento.”*

“Artículo 96.

Control de los ingresos

1. *Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”*

“ Artículo. 121.

Entes impedidos para realizar aportaciones

1. *Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:*

(...)

I) Personas no identificadas...”

“Artículo 127. Documentación de los egresos

1. *Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

2. *Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*

3. *El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.*
(...)”

“Artículo 143 Bis. Control de agenda de eventos políticos

1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo.

2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

Artículo 218. Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico
(...)

2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin incluir otro tipo de gastos.

a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme a la tabla de distribución siguiente:

Tabla de prorrateo conforme al artículo 83 de la Ley de Partidos				
INCISO	PRESIDENTE	CANDIDATO A SENADOR	CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL	CANDIDATO LOCAL
Inciso a)	40%	60%		
Inciso b)	60%		40%	
Inciso c)	20%	50%	30%	
Inciso d)	15%	35%	25%	25%
Inciso e)	40%			60%
Inciso f)	20%	60%		20%
Inciso g)	40%		35%	25%
Inciso h)		70%	30%	
Inciso i)		50%	30%	20%
Inciso j)		75%		25%
Inciso k)			50%	50%

I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales.

***b)** Para campañas locales: Tratándose de los casos, en los que se promoció a dos o más candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local, para la distribución de los gastos de campaña se estará a lo siguiente:*

***I.** Se deben identificar los candidatos beneficiados.*

***II.** Cuando los candidatos beneficiados sean locales y federales, primero se aplicará la distribución dispuesta en el artículo 83 de la Ley de Partidos y posteriormente la concerniente a la distribución local, es decir, el monto resultante de la determinación de la aplicación de la primera distribución, se convertirá en el 100% a distribuir para la tabla aplicable a lo local.*

***III.** Si se encuentran involucradas campañas locales de distintas Entidades Federativas, se deberá dividir el gasto total a prorratear que corresponda a lo local entre el número de Entidades Federativas involucradas de acuerdo al porcentaje de financiamiento público de campaña asignado a la entidad federativa en el Proceso Electoral correspondiente, donde el resultado será el 100% a distribuir entre las campañas beneficiadas de cada Entidad Federativa en el ámbito local.*

***IV.** Se debe identificar el tope de gasto de cada candidato beneficiado.*

***V.** Se obtiene la sumatoria de los topes de gastos de campaña identificados en el inciso anterior.*

***VI.** Para asignar el porcentaje de participación del gasto, se dividirá el tope de gasto de cada candidato beneficiado, entre la sumatoria obtenida en el inciso anterior.*

***VII.** Con base en el porcentaje determinado en el inciso anterior, se calculará el monto que le corresponde reconocer en su informe de gastos de campaña a cada candidato beneficiado, con base en el valor nominal del gasto a distribuir o, en su caso, en la parte proporcional que corresponda.”*

Del fundamento en cita es preciso señalar, por una parte, que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, la información relativa a sus gastos, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, así como la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los más altos principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y la rendición de cuentas y de control, en el cumplimiento de las

obligaciones relativas al control de gastos (egresos) de propaganda durante el periodo de campaña.

De ahí que, los aludidos preceptos normativos establecen mecanismos de tutela estrictos en favor de los citados principios, para salvaguardar en conjunto la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad de los actos de fiscalización aplicables a los institutos políticos que en todo momento deben sujetarse y buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva para conseguir un plano de igualdad y equidad en su vida política, esto con la finalidad de que esta se desarrolle dentro del marco de nuestro Estado de Derecho, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral y un menoscabo al ideal democrático.

Asimismo, los institutos políticos y candidatos se encuentran obligados a rechazar aportaciones de entes prohibidos de cualquier clase, sea apoyo político, económico y propagandístico, y si fuese el caso de gastos no reportados deben ser distribuidos y determinarse el valor, además de que se consideran gastos prorrateables en Proceso Electoral ya que favorecen a dos candidatos o más, por lo cual debe seguirse las especificaciones que el Reglamento de Fiscalización determina para ello.

En este orden de ideas, se tiene como finalidad regular lo que se permite en periodo de campaña tratándose de reportar ingresos, gastos de los partidos políticos y los candidatos postulados por los mismos, ya que se especifica en la normatividad las reglas por las cuales se deben apegar, es decir, deben ubicar caso concreto, que si es propaganda en eventos, que si es propaganda en espectaculares, que si es propaganda que no se trata de espectaculares, que si esa propaganda la pagan del financiamiento otorgado, que si es recibida por aportantes o militantes del partido, todas y cada una de las especificaciones de dicho concepto debe encontrarse documentado y reportado debidamente, ya que de recibirse por quienes no se identifican, por quienes la ley prohíbe su interacción y aportación, se están alejando de la debida rendición de cuentas y, en consecuencia, cometiendo infracciones al ordenamiento electoral.

Por tal motivo, la finalidad de utilizar el registro de operaciones por los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización relativos a la propaganda en periodo de campaña, es lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan la correcta rendición de cuentas.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema financiero mexicano.

Así las cosas, de configurarse la falta sustancial de mérito, traería consigo la no rendición de cuentas, de los recursos, la ilegalidad, incertidumbre, la no acreditación del origen lícito de ingresos, la inequidad en el uso de recursos y en la contienda, impidiendo garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; y, en consecuencia, se vulneraría la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral.

Dicho lo anterior, los sujetos obligados al rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora habrán de hacerlo de manera transparente, precisa y exhaustiva dentro de un periodo de tiempo breve, por ello, surge la obligación de los sujetos obligados de registrar sus gastos de propaganda durante la campaña para la elección de que se trate en los plazos previstos en la Ley,

Ahora bien, previo a entrar al estudio de **fondo**, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

Mediante escrito suscrito por Jesús Méndez Vargas, en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California Sur, en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, así como de su entonces candidato a Gobernador de Baja California Sur, el C. Víctor Manuel Castro Cosío y quien fuera candidata a la presidencia municipal de La Paz, en el estado de Baja California Sur, la C. Milena Paola Quiroga Romero, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en dicha entidad federativa, denunciando posibles hechos que a su consideración podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización en aras de la celebración de un evento, fue difundida y colocada propaganda que omitieron registrar los sujetos obligados.

En este sentido, y estando en aptitud de realizar un pronunciamiento sobre los hechos investigados relativo a la omisión de propaganda que difundieron entes prohibidos que constituye la materia de fondo del presente asunto, por cuestiones

de método y estudio⁵, se procede al análisis puntual del material probatorio allegado por las partes ante la Unidad Técnica de Fiscalización en los siguientes rubros temáticos:

4.1 MATERIAL PROBATORIO.

4.1.a PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA.

4.1.b PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

4.1.c PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO MORENA.

4.1.d PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.

4.1.e PRUEBAS APORTADAS POR EL C. VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO.

4.1.f PRUEBAS APORTADAS POR LA C. MILENA PAOLA QUIROGA ROMERO.

4.2 CONCEPTO DENUNCIADO REGISTRADO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN.

4.3 CONCEPTOS NO REPORTADOS EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN.

4.4 DETERMINACIÓN DEL COSTO.

4.5 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados respectivos.

4.1 MATERIAL PROBATORIO.

4.1.a PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA.

- **Documental Pública.** Razón y constancia de día seis de julio de dos mil veintiuno, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, sobre las operaciones contables registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, respecto del C. Víctor Manuel Castro Cosío, candidato a la

⁵ Vuélvase aplicable por analogía la **Jurisprudencia 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.** Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.

Gubernatura de Baja California Sur, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos Morena y del Trabajo, en el Estado de Baja California Sur, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021.

- **Documental Pública.** Razón y constancia de día seis de julio de dos mil veintiuno, levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, sobre las operaciones contables registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, respecto de la C. Milena Paola Quiroga Romero, candidata la Gubernatura de Baja California Sur, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos Morena y del Trabajo, en el Estado de Baja California Sur, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021.
- **Documental Pública.** Acta circunstanciada de veintidós de junio de dos mil veintiuno, número INE/DS/OE/CIRC/278/2021, levantada por la Supervisora de Oficialía Electoral la Ing. Briselet Yoselin Manzano Álvarez Oficialía del Instituto Nacional Electoral, a quien se le delegó la función de Oficialía Electoral para la certificación de cinco direcciones electrónicas, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado de Baja California Sur.

De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio en cuanto su autenticidad y los hechos que en ellas se consignan.

4.1.b PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

- **Técnica.** Ofrecida por el quejoso consistente en las imágenes insertadas en el escrito de queja.

Se tiene por admitida y constituye una prueba señalada en términos del artículo 15, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

- **Inspección ocular.** Solicitada por el quejoso para la certificación de las direcciones electrónicas señalas en su escrito de queja.

Se tiene por admitida y constituye una prueba señalada en términos del artículo 15 numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

- **Instrumental de actuaciones**, en todo lo que favorezca al partido político, derivado del conjunto de constancias que obran en el expediente formado con motivo del presente procedimiento.

Se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

- **La presuncional** en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que favorezca los legítimos intereses del partido político como entidad de interés público. La primera se encuentra explícita o implícita en la ley, por eso su denominación de legal; la segunda, es la consecuencia de deducirse hechos conocidos para averiguar la verdad de otros desconocidos.

Se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

4.1.c PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO MORENA.

Toda vez que el partido no dio respuesta al emplazamiento, se le tiene sin ofrecimiento de pruebas.

4.1.d PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.

Toda vez que el partido no dio respuesta al emplazamiento, se le tiene sin ofrecimiento de pruebas.

4.1.e PRUEBAS APORTADAS POR EL C. VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO.

Toda vez que el candidato no dio respuesta al emplazamiento, se le tiene sin ofrecimiento de pruebas.

4.1.f PRUEBAS APORTADAS POR LA C. MILENA PAOLA QUIROGA ROMERO.

Toda vez que la candidata no dio respuesta al emplazamiento, se le tiene sin ofrecimiento de pruebas.

4.2 CONCEPTO DENUNCIADO REGISTRADO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN.

El quejoso denuncia que se difundió propaganda a través de lonas en apoyo a favor de quien fuera candidato para Gobernador de Baja California Sur Víctor Manuel Castro Cosío y candidata para Presidenta Municipal de La Paz Milena Paola Quiroga Romero, en un evento realizado con motivo de la presentación de libro de la autoría del Senador Ricardo Monreal Ávila, en La Paz, Baja California Sur, y en donde además asistieron más senadores, que convirtieron el evento de cultural a políticos electoral constituyendo una aportación de ente prohibido y violentando la equidad en la contienda electoral.

En ese sentido, las pruebas ofrecidas por el quejoso que consisten en imágenes de las publicaciones en la red social Facebook del evento de presentación referido, así como la solicitud de certificación de dichas ligas electrónicas y de las cuales queda constatado el video del evento celebrado en La Paz, Baja California Sur, por lo que del mismo se acredita la existencia de la propaganda en favor de dos candidaturas en el estado de Baja California Sur, en periodo de campaña.

En razón de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción, ello a partir de los indicios aportados en el escrito inicial, entre las que destaca, por un lado, la solicitud de certificación a Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, respecto de los enlaces electrónicos señalados por el quejoso para respaldar su dicho, con la finalidad de certificar la existencia y contenido del video, corroborando así el valor dado atendiendo a su naturaleza.

Ahora bien, del contenido del video lo que se aprecia y es susceptible de fiscalizar es la propaganda consistente en lonas a favor de ambos candidatos, por lo que esta autoridad fiscalizadora en las diligencias de investigación que realizó para dotar de certeza la conclusión a la que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización para acreditar o desvirtuar los gastos del instituto político, así como del otrora candidato y la otrora candidata, se consultó el Sistema Integral de Fiscalización.

De dicha verificación y del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Concepto denunciado	Número de póliza	Periodo de operación	Tipo-subtipo	Descripción	Concepto	Documentación Soporte	Unidades/ Piezas	Total
Lonas	4	1	EGRESOS	PAGO FACTURA 6213 ANA JANETT MOYRON_IMP RESION DE ETIQUETAS Y LONAS_PROC ESO ELECTORAL CANDIDATO GOBERNADOR	Lona impresa medidas varias	Factura 6213	13275	\$ 502,104.72
						Aviso de contratación		
						Detalle de movimiento de pago al proveedor		
	7	1	DIARIO	FACTURA 6213 ANA JANETT MOYRON_IMP RESION DE ETIQUETAS Y LONAS_PROCESO ELECTORAL CANDIDATO GOBERNADOR	LONA IMPRESA	Factura 6213		
						Fotos		
	32	2	DIARIO	FACT FB6370 POR PUBLICIDAD UTILITARIA DE VOLANTES IMPRESOS DIGITAL A COLOR, LONAS IMPRESAS DE 78X55, CALCOMANIAS IMPRESAS EN VINIL DE ANA JANETT MOYRON QUIROZ	LONA IMPRESA	Factura 6370		\$103,440.00
						Contrato Factura 6346		

Como se desprende, de las imágenes contenidas en el video señalado por el quejoso, se observan lonas con propaganda de ambos candidatos, por lo tanto, dicho concepto se encontró registrada en el Sistema Integral de Fiscalización.

Si bien el quejoso refirió que del video bastaba con ser prueba suficiente para que de su contenido se desprendiera de manera concatenada conductas infractoras en la normatividad electoral y en materia de fiscalización, lo cierto es que, el análisis corresponde únicamente a conceptos que sean susceptibles de ser fiscalizados.

En ese sentido, es viable en este apartado pronunciarse del concepto de propaganda de lonas, quedando acreditado que se contrató y registró en el SIF, ya que constituye evidencia de la que se dejó constancia para los efectos legales

conducentes, constituida en términos valorativos como una documental pública en cuanto su alcance probatorio, en términos del artículo 16 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser un documento expedido por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, es decir, que la misma hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie, sobre el reporte de los gastos de propaganda de lonas.

4.3. CONCEPTOS NO REPORTADOS EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN.

De las diligencias llevadas a cabo por la Unidad Técnica de Fiscalización no se encontró registro del evento con fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno en el Sistema Integral de Fiscalización, ni por parte del otrora candidato Víctor Manuel Castro Cosío, ni por la otra candidata Milena Paola Quiroga Romero, ambos postulados por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur.

Por lo que, esta autoridad en aras de esclarecer los hechos relativos al reporte del evento por parte de los sujetos incoados, se realizaron diligencias de solicitud de información a cuatro Senadores, siete Senadoras y un Diputado Federal, siendo doce los servidores públicos integrantes del Poder Legislativo Federal, quienes en sus respuestas señalaron que solo asistieron al evento de la presentación del libro del Senador Ricardo Monreal Ávila y que cada uno asistió como tema académico, pagando sus gastos por sí mismos.

Derivado que se trató el evento de la presentación de un libro de autoría del Senador Ricardo Monreal Ávila, fue que se le solicitó a dicho servidor público que informara sobre el evento y su participación en el mismo. En ese sentido, dio respuesta manifestando que el motivo de la presencia de Víctor Manuel Castro Cosío se debió a que fue presentador y comentarista de su libro más reciente denominado “nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”, y por lo que hace a Milena Paola Quiroga Romero fue en carácter de moderadora de la presentación de su libro respecto al cual dio una introducción y un repaso histórico democrático contextual, debiéndose la presencia de dichas personas a sus perfiles académicos y su experiencia práctica con relación a los mecanismos jurídicos democráticos. Además, indicó que él no organizó el evento dado que se encontraba en ese periodo presentando su libro y fue el Senador Ricardo Velázquez Meza quien lo invitó a exponerlo en La Paz, Baja California Sur, por lo que desconoce todo lo relacionado al evento, declarando además que su presencia el día catorce de mayo de dos mil veintiuno correspondió al periodo de receso en el que se encontraba sin tener reunión alguna que implicara su presencia en el recinto legislativo y que mediante

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

oficio a la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, señaló los días en que realizaría actividades académicas entre los que se encontraba el del evento en cuestión, solicitando que se le descontara la dieta correspondiente a los días de sus actividades académicas.

Asimismo, se solicitó información a la Editorial Porrúa, quien a través de su apoderada legal dio contestación afirmando que ha llevado publicaciones e impresiones de obras de juristas, politólogos, sociólogos, entre los que se encuentra el C. Ricardo Monreal Ávila, refiriendo una lista de libros que se le han impreso de dicho autor, destacando el libro que presentó en el evento que dio origen a la queja, titulado “Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral”, Edición 1, año de edición 2021, sin embargo, la Editorial manifestó no haber realizado el evento señalado.





En ese sentido, dicho evento no fue reportado ni comprobado por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, a quienes se les emplazó en tiempo y forma, sin recibir respuesta o manifestación alguna hasta el momento de la presente Resolución, ni tampoco respuesta de quienes fueran candidatos el C. Víctor Manuel Castro Cosío, ni por la C. Milena Paola Quiroga Romero en dicha entidad federativa.

Ahora bien, la Unidad Técnica de Fiscalización para tener la certeza del evento, llevó a cabo la diligencia de certificación por parte de Oficialía Electoral de las ligas electrónicas señaladas por el quejoso, las cuales corresponden al video del evento denunciado, del cual el quejoso obtuvo las imágenes.



Ahora bien, es importante mencionar que, del contenido del video del evento que fue publicado en la red social Facebook, es posible advertir que debido a la organización del mismo en el que se colocó propaganda de lonas en las paredes del espacio físico donde se realizó, también fue posible observar otros conceptos que, al no ser reportado el evento, por consiguiente, no se registraron tampoco por parte de los sujetos obligados, mismos que se muestran a continuación:

EVENTO EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 14-MAYO-2021				
No.	Imagen aportada por el quejoso	Link de consulta	Fecha de publicación	Conceptos detectados por la autoridad

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

1				<p>sillas tapizadas color azul con patas de madera de mesa</p> <p>mesa de centro de madera</p> <p>micrófonos inalámbricos color negro</p>
2	  	<p>https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/982031655668339</p>	<p>14 de mayo de 2021</p>	<p>sillas estibable para evento, metálica con soporte de tela color negro</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

3				Equipo de sonido
4				Cámara de video profesional con trípode

Si bien el quejoso no indicó el número de unidades de los gastos denunciados, del análisis a las imágenes contenidas en el video de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, de momento a momento, se desprende que los conceptos observados y la cantidad de estos son los siguientes:

CANTIDAD	CONCEPTOS DENUNCIADOS Y DETECTADOS POR LA AUTORIDAD
3	Sillas tapizadas color azul con patas de madera
1	Mesa de centro de madera aproximadamente un metro
3	Micrófonos (3 personas las que hablaron)
100	Sillas estibable para evento metálicas con soporte de tela color negro
1	Equipo de sonido con modulador y bocina
1	Cámara de video profesional con su trípode

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar los hechos materia del presente asunto, en primera instancia la autoridad fiscalizadora notificó el inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito mediante oficios INE/UTF/DRN/27584/2021, INE/UTF/DRN/27588/2021, INE/UTF/DRN/27590/2021 e INE/UTF/DRN/27592/2021, respecto las probables conductas infractoras en la materia, a los partidos políticos incoados y sus otrora candidatos, sobre las imputaciones que se encauzaron en su contra para que contestaran conforme a su Derecho conviniera.

Sin embargo, el sujeto obligado Morena y Partido del Trabajo a la fecha de la presente Resolución no formularon contestación al emplazamiento.

Derivado de lo anterior, es dable el señalar que, el evento existente donde estuvieron presentes los denunciados, fue en favor de los mismos, correspondiendo egresos no reportados que se debían haber registrado también, corriendo a cargo de los sujetos incoados, por lo cual, existe la obligación de reportar dicho concepto de gasto, situación que en el caso concreto no se realizó.

Por tanto, del caudal probatorio en cita al concatenarse las constancias que obran en el expediente, los hechos constatados de la existencia del evento y gastos dentro del mismo, para la autoridad no hay duda alguna de que los sujetos incoados, adquirieron un beneficio para los otrora candidatos postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Baja California Sur.

Consecuentemente, este Consejo General determina que la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur no reportó los conceptos detectados por la autoridad, vulnerando los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, conjuntamente con el 127 del Reglamento de Fiscalización, por tal razón se declara **fundado** lo analizado en el presente apartado.

4.4 DETERMINACIÓN DEL COSTO.

Como quedó precisado en el apartado que antecede, se detectó por parte de la autoridad gastos de campaña relativos al desarrollo del evento no reportado, transgrediendo disposiciones en materia de fiscalización.

De conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de

cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En este contexto y bajo la premisa de que se observó esa irregularidad al partido, es menester que ante el hecho origen de ello se hizo del conocimiento a los sujetos incoados, otorgándoseles su garantía de audiencia para que presentaran acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar su debido reporte.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, se acreditó la existencia de la celebración del evento y los partidos políticos no advirtieron en ningún momento conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir a la coalición de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

En ese sentido, una vez determinado y acreditado el gasto de campaña respecto a los conceptos objeto de estudio del presente apartado, se procedió a efectuar la cuantificación del monto involucrado, para lo cual se allegaron elementos objetivos y coherentes que permitieran determinar el beneficio económico que recibieron el C. Víctor Manuel Castro Cosío y la C. Milena Paola Quiroga Romero, así como su coalición postulante Juntos Haremos Historia en Baja California Sur, durante el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Baja California Sur.

En ese orden de ideas, el monto del beneficio que se debe tomar en cuenta es el concerniente al costo de los conceptos detectados, en relación directa con el ente beneficiado, es decir, el egreso que fue omiso en reportar la coalición, monto que, se desglosa a continuación, en virtud de la cuantificación realizada por parte de la Dirección de Auditoría en el oficio INE/UTF/DA/2598/2021.

ID Matriz	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario con IVA	Costo Total
77377	Sillas de madera	H87 PIEZA	3	\$8.12	\$24.32
75612	Mesa de centro de madera	UNIDAD DE SERVICIO	1	\$232.00	\$232.00
23053	Micrófono inalámbrico	E48 UNIDAD DE SERVICIO	3	\$299.28	\$897.84
13243	Silla Estibable para eventos	H87 PIEZA	100	\$6.96	\$696.00
64293	Equipo de sonido	ACT ACTIVIDAD	1	\$2,552.00	\$2,552.00
2241	Cámara de video profesional	H 87 PIEZA	1	\$696.00	\$696.00
Total					\$5,098.20

Una vez obtenido el costo por el gasto no reportado, se procedió a determinar el valor a considerar por cada candidatura beneficiada de la forma siguiente:

Nombre de la candidata o del candidato	Gasto determinado A	Tope de gastos	Suma de topes de gastos	Factor de prorrateo D=B/C	Importe a considerar E=A*D
		B	C		
Víctor Manuel Castro Cosío	\$5,098.20	\$16,647,040.00	\$23,069,192.00	0.72	\$3,670.70

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Milena Paola Quiroga Romero		\$6,422,152.00		0.28	\$1,427.50
Totales	\$5,098.20				\$5,098.20

En ese tenor, tal gasto debe ser considerado para efectos del respectivo tope de gastos de campaña y ser sumado el beneficio obtenido por el **egreso no reportado**, descrito en la presente Resolución, para ello es necesario apuntar que respecto el concepto de gasto denunciado, se acreditó el beneficio en favor del C. Víctor Manuel Castro Cosío, otrora candidato a Gobernador de Baja California Sur y de la C. Milena Paola Quiroga Romero, otrora candidata a presidenta municipal de La Paz, en el estado de Baja California Sur, así como su coalición postulante integrada por los partidos Morena y del Trabajo, durante el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en la entidad mencionada, por ende, esta autoridad colige que deberá sumarse el gasto no reportado, por un total **\$5,098.20 (Cinco mil noventa y ocho pesos 20/100 M.N.)**, al tope de gastos de campaña de los sujetos obligados en cuestión.

4.5 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Toda vez que en este considerando se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta
- d) La trascendencia de las normas transgredidas
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando, además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

En relación con la irregularidad identificada en el presente considerando, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar el gasto detectado de un evento consistente en sillas, mesas, equipo de sonido y cámara de video profesional durante el periodo de campaña, por un monto total de **\$5,098.20 (Cinco mil noventa y ocho pesos 20/100 M.N.)**, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California Sur.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar el gasto realizado, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la entidad referida, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.⁶

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron.

El sujeto obligado al omitir reportar la erogación en comento, vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

La irregularidad atribuida al ente político, surgió en el marco de del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chihuahua Baja California Sur.

⁶ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,

así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente⁷:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de

⁷ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.

un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En la falta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos⁸ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁹.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y

⁸ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: (...) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente (...)

⁹ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en una **falta de resultado** que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.¹⁰

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

¹⁰ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica de los partidos políticos infractores, ya que mediante el Acuerdo IEEBCS-CG007-ENERO-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, los montos siguientes:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2021
Partido del Trabajo	\$3,106,190.83
Morena	\$9,561,670.52

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que, para valorar la capacidad económica del ente político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, es importante mencionar a los partidos políticos que cuentan con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

ID	PARTIDO POLÍTICO	RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD	MONTO TOTAL DE LA SANCIÓN	MONTO DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE JUNIO DE 2021	MONTO POR SALDAR	TOTAL
3	Del Trabajo	INE/CG1101/2018	\$1,153,150.88	\$1,153,150.84	\$0.04	\$1,153,150.88
		INE/CG57/2019	\$1,509.80	\$1,509.80	\$ -	\$1,509.80
		SER-PSC-163/2018	\$9,994.40	\$9,994.40	\$ -	\$9,994.40
		INE/CG570/2018	\$12,267.50	\$12,267.50	\$ -	\$12,267.50
		INE/CG466/2019	\$273,068.74	\$273,068.74	\$ -	\$273,068.74
		INE/CG647/2020	\$194,526.53	\$117,157.12	\$ 77,369.41	\$194,526.53
4	Morena	INE/CG1101/2018	\$2,804,909.13	\$2,804,909.13	\$ -	\$2,804,909.13
		INE/CG61/2019	\$324,972.47	\$324,972.47	\$ -	\$324,972.47

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

ID	PARTIDO POLÍTICO	RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD	MONTO TOTAL DE LA SANCIÓN	MONTOS DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE JUNIO DE 2021	MONTOS POR SALDAR	TOTAL
		INE/CG470/2019	\$243,589.11	\$243,589.11	\$ -	\$243,589.11
		INE/CG650/2020	\$880,832.89	\$796,805.88	\$ 84,027.01	\$880,832.89

Del cuadro anterior se advierte que al mes de junio de dos mil veintiuno, el Partido del Trabajo tiene un saldo pendiente de \$77,369.41 (setenta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos 41/100/M.N.) y el partido Morena tiene un saldo pendiente de \$84,027.01 (ochenta y cuatro mil veintisiete pesos 01/100/M.N.).

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña del **Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Baja California Sur**, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente **Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Baja California Sur**.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado asciende a un total de **\$5,098.20 (Cinco mil noventa y ocho pesos 20/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹¹

En este sentido, es importante mencionar que en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 en el estado de Baja California Sur se registró ante el Organismo Público Local la siguiente coalición (total) para contender a diversos cargos de elección (Gubernatura, Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos), para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente, se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.

Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California Sur.”

¹¹ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur mediante Acuerdos IEEBCS-CG001-ENERO-2021 e IEEBCS-CG036-FEBRERO-2021, determinó la procedencia del convenio de la coalición total para postular candidatura a la gubernatura del Estado de Baja California Sur, así como la integración de los Ayuntamientos y los Distritos Locales al Congreso del estado por el principio de mayoría relativa, integrada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, así como su modificación, respectivamente, en dicho convenio se determinó en la cláusula DÉCIMA NOVENA , la forma en la que se individualizarían las sanciones en caso de infracciones:

“(…)

DÉCIMA NOVENA.- DE LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES DE LOS PARTIDOS COALIGADOS.

Las partes acuerdan, que responderán en forma individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes, precandidatas o precandidatos o su candidata o candidato, asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 43, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y de acuerdo al porcentaje de aportación previsto en el numeral 7 de la cláusula Décimo Quinta de acuerdo al tipo de elección de que se trate, de conformidad con lo siguiente:

Gubernatura del Estado de Baja california Sur				
Partido Político	Porcentaje de aportación	Porcentaje total de aportación	Porcentaje de sanción	Porcentaje total de sanción
Morena	50%	100%	50%	100%
Partido del Trabajo	50%		50%	

(…)

Ayuntamientos del Estado de Baja california Sur				
Partido Político	Porcentaje de aportación	Porcentaje total de aportación	Porcentaje de sanción	Porcentaje total de sanción
Morena	30%	100%	50%	100%
Partido del Trabajo	30%		50%	

(…)”

No obstante, lo anterior, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones, considerando para tal efecto **el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición**.

Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en este sentido, en la cláusula DECIMO QUINTA, numeral 7 se establecen las aportaciones que los partidos políticos darían a la coalición, conforme a lo siguiente:

DECIMA QUINTA. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE LA COALICIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DE FINANCIAMIENTO EN CANTIDADES LÍQUIDAS O PORCENTAJES QUE APORTARÁ CADA PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Y LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.

(...)

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’**¹².

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de la siguiente forma:

Elección de Gubernatura

Partido político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de Aportación	Aportación (A)	Total (B)	Porcentaje de sanción $C=(A*100)/B$
Morena	\$4,674,781.50	50%	\$2,337,390.75	\$3,096,506.95	75.48%

¹² Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Partido político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de Aportación	Aportación (A)	Total (B)	Porcentaje de sanción $C=(A*100)/B$
Partido del Trabajo	\$1,518,232.40	50%	759,116.20		49.03%

Elección de Ayuntamientos

Partido político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de Aportación	Aportación (A)	Total (B)	Porcentaje de sanción $C=(A*100)/B$
Morena	\$4,674,781.50	30%	\$1,402,434.45	\$1,857,904.17	75.48%
Partido del Trabajo	\$1,518,232.40	30%	\$455,469.72		24.51%

Así, sumando los porcentajes de aportación realizados por cada partido político, se advierte que los montos totales de aportación para las elecciones del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Baja California Sur, son los siguientes:

Partido político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje total de aportación de acuerdo al Convenio de Coalición. (Clausula 15ª)	Aportación (A)	Total (B)	Porcentaje de sanción $C=(A*100)/B$
Morena	\$4,674,781.50	100%	\$4,674,781.50	\$6,193,013.90	75.48%
Partido del Trabajo	\$1,518,232.40	100%	\$1,518,232.40		24.51%

(...)

No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el siguiente:

Partido Político	Porcentaje de aportación
Morena	95.15%
Partido del Trabajo	4.85%

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la **fracción III** del artículo en comento, consistente en una **reducción de la ministración mensual** del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$5,098.20 (Cinco mil noventa y ocho pesos 20/100 M.N.)**, lo que da como resultado total la cantidad de **\$5,098.20 (Cinco mil noventa y ocho pesos 20/100 M.N.)**.

Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido político integrante de la **Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur**, mismos que fueron desarrollados y explicados en el **Considerando 4.5**, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Morena** en lo individual, lo correspondiente al **95.15% (noventa y cinco punto quince por ciento)** del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$4,850.93 (Cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 93/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido del Trabajo** en lo individual, lo correspondiente al **4.85% (cuatro punto ochenta y cinco por ciento)** del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$247.26 (Doscientos cuarenta y siete pesos 26/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Tal y como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se hizo del conocimiento de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los hechos denunciados en términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia.

De este modo, en el caso de que la determinación de la autoridad competente resultara vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ejerce esta autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir a la **Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral** de este Instituto, informe la determinación que haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda.

6. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto **aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020**, por el que determinó la **notificación electrónica** de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto emergente por el que atraviesa el país a causa de la pandemia por COVID-19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido, a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben imperar las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realicen la notificación a los interesados de su instituto político.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos en el cuerpo del presente curso, y en ejercicio de las atribuciones conferidas a este Consejo General en los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **desecha** la queja interpuesta por Jesús Méndez Vargas, en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California Sur de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de los partidos Morena y del Trabajo que integraron la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur, así como de su otrora candidato a Gobernador de Baja California Sur, el C. Víctor Manuel Castro Cosío y su otrora candidata a Presidenta Municipal de La Paz, en Baja California Sur, la C. Milena Paola Quiroga Romero, en los términos del **Considerando 4.5** de la presente Resolución.

TERCERO. En términos del **considerando 4.5**, se impone a la entonces Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California Sur”, integrada por los partidos políticos **Morena y del Trabajo** las siguientes sanciones:

Al **partido político MORENA** en lo individual, lo correspondiente al **95.15% (noventa y cinco punto quince por ciento)** del monto total de la sanción, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto **Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes**, hasta alcanzar la cantidad de **\$4,850.93 (Cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 93/100 M.N.)**. Al **Partido del Trabajo** en lo individual, lo correspondiente al **4.85% (cuatro punto ochenta y cinco por ciento)** del monto total de la sanción, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto **Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes**, hasta alcanzar la cantidad de **\$247.26 (Doscientos cuarenta y siete pesos 26/100 M.N.)**.

CUARTO. Notifíquese electrónicamente a los Partidos Políticos Acción Nacional, Morena y del Trabajo, así como a los CC. C. Víctor Manuel Castro Cosío y. Milena Paola Quiroga Romero a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el **Considerando 6** de la presente Resolución.

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/464/2021/BCS

Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**